

PANORAMA MUNDIAL DE LA INTEGRIDAD DEL AGUA 3



Mejorando la integridad en la financiación del agua y el saneamiento

La falta de financiación adecuada está socavando la capacidad de los gobiernos para garantizar los derechos humanos al agua, al saneamiento y a un medio ambiente limpio y saludable. El Banco Mundial estima que los países necesitan aumentar su gasto actual en unos 140.000 millones de USD anuales -triplicando el gasto actual- para alcanzar las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6 sobre agua potable, saneamiento e higiene (WASH) (Joseph et al., 2024). Se necesita financiación adicional y creciente para mejorar la resiliencia de los sistemas de agua y saneamiento y para apoyar la adaptación de estos sistemas.

Según la Red de Integridad por el Agua (WIN, por sus siglas en inglés) y el Banco Interamericano de Desarrollo, **la corrupción, la mala gestión y otras fallas de integridad contribuyen significativamente al déficit financiero general**, malgastando hasta el 26% del dinero invertido en el sector del agua (Adam et al, 2020). Socavan el uso eficaz de los fondos, debilitan las instituciones del sector, provocan importantes pérdidas financieras en el sector y desvían las nuevas inversiones, alejándolas de las prioridades clave y de quienes más las necesitan.

Los sectores del agua y el saneamiento son especialmente susceptibles a la corrupción debido a los fragmentados y complejos acuerdos institucionales, los monopolios naturales y los elevados costes de capital, mantenimiento y renovación de las infraestructuras. El sector de las infraestructuras, del que dependen en gran medida el agua y el saneamiento, es uno de los más corruptos del mundo. El FMI calcula que entre el 30% y el 50% de los costes generales de las

infraestructuras (no sólo de agua y saneamiento) se pierden debido a una mala gestión, incluida la corrupción (Schwartz et al, 2020).

Abordar la corrupción y las fallas de integridad en la financiación del agua y el saneamiento es fundamental para garantizar el uso eficiente de los fondos disponibles y la mejora de la prestación de servicios.

Este Panorama Mundial de la Integridad del Agua (WIGO, por sus siglas en inglés) profundiza en las formas más importantes en que la integridad influye en la financiación de los sectores del agua y el saneamiento. Su objetivo es fomentar el diálogo y la acción e inspirar a los actores de todos los niveles para que se conviertan en defensores de la integridad.

WIGO se centra en:

- Mejorar la comprensión del problema de la financiación del agua y el saneamiento y de las principales vulnerabilidades y factores de riesgo ([Partes 1 y 2](#));
- Destacar los principales riesgos de integridad relacionados con las distintas fuentes de financiación a lo largo del ciclo presupuestario ([Parte 3](#));
- Explicación de las diferentes vías para hacer frente a los riesgos de corrupción e integridad ([Parte 4](#)); y
- Ofrecer recomendaciones a los distintos agentes sobre cómo actuar para mejorar la integridad ([Parte 5](#)).

El Costo de No Hacer Nada

La corrupción y la falta de integridad desvían recursos, contribuyen a grandes pérdidas financieras y amplían el déficit de financiación. Pero no se trata sólo de dinero. Las fallas de integridad en la financiación del agua y el saneamiento tienen consecuencias sociales, económicas y medioambientales devastadoras y afectan de muchas maneras la vida de las personas. Y el impacto recae de forma desproporcionada sobre los marginados y los indefensos.

Mientras que el coste de la acción para mejorar la integridad es relativamente bajo, el coste de la inacción es inaceptablemente alto y se traduce en una mala prestación de servicios, costes de infraestructura inflados y deterioro de la calidad del agua, costes que se ven exacerbados por los efectos del cambio climático. Debemos cambiar de rumbo. Si no actuamos, la corrupción y las fallas de integridad seguirán ralentizándonos, aumentando los costes y socavando la eficacia de nuestro trabajo.

Estas consideraciones tienen como telón de fondo la reducción del espacio cívico, el cambio climático y la rápida evolución del mundo digital.

El espacio cívico permite a individuos, organizaciones y comunidades participar en la vida política, económica y social. El espacio cívico abierto facilita el acceso a la información, la acción colectiva, el diálogo y la expresión de la disidencia. Es crucial para que los gobiernos y el sector privado rindan cuentas y para descubrir y abordar la corrupción y otros problemas de integridad que socavan el suministro de agua y saneamiento.

El cambio climático está planteando nuevos retos al suministro de agua y saneamiento y a la gestión de los recursos hídricos. Junto con esto, surgen una variedad de nuevas fuentes de financiamiento, en particular el financiamiento para la adaptación al cambio climático, que conlleva nuevos riesgos de integridad.

La rápida expansión de la tecnología digital y de los sistemas de aprendizaje automático puede ayudar a reducir los riesgos de corrupción y, al mismo tiempo, introducir potencialmente nuevas vulnerabilidades.

La Oportunidad de la Integridad

Ahora es el momento de actuar. Existen oportunidades reales para fortalecer la financiación del agua y el saneamiento mediante la creación y promoción de una cultura de integridad. Esto requiere tomar medidas específicas para promover la integridad a través y junto al trabajo existente, con compromiso y nuevas alianzas para la acción.

WIGO sugiere medidas prácticas que las partes interesadas pueden tomar para fortalecer la integridad en la financiación del sector. Si bien estas medidas se aplican en todo el mundo, como se desprende de la amplia gama de ejemplos proporcionados, el objetivo principal de WIGO es apoyar a las partes interesadas que defienden la integridad en los países en desarrollo, donde vive la mayoría de las personas que carecen de agua y saneamiento adecuados.

Integridad en la Financiación del Sector del Agua y Saneamiento

Múltiples flujos de financiación para el agua y el saneamiento

La financiación del agua y el saneamiento procede de tarifas, impuestos y transferencias, conocidas como las 3T (por sus siglas en inglés; tariffs, taxes, and transfers). Con gran diferencia, la mayor fuente de financiación procede de los usuarios, seguido de los gobiernos, aunque existen importantes variaciones regionales. En América Latina y el Caribe, las tarifas cubren más del 80% de los costes del sector. En Asia, la mayoría de los gastos del sector (más del 60%) son financiados por el gobierno. Oceanía (excluidos Nueva Zelanda y Australia) es la única región muy dependiente de la financiación reembolsable.

La financiación reembolsable, aunque sólo represente una pequeña parte de la inversión total, es una herramienta importante para gestionar los costes de capital de la inversión en infraestructuras, pero debe gestionarse con cuidado, ya que contribuye a los niveles de endeudamiento a nivel nacional o institucional. Existen riesgos singulares relacionados con el despliegue y la gestión de la financiación reembolsable, especialmente relacionados con la complejidad y la opacidad de los mecanismos de financiación, así como con los juegos de poder que afectan a las negociaciones (véase [la sección 3.2.3](#)). Estos riesgos también se aplican a la financiación mixta, que adopta diferentes formas pero está relacionada con el uso de financiación pública para atraer financiación privada. A pesar de los importantes esfuerzos realizados para atraer financiación privada a los sectores del agua y el saneamiento, dicha inversión sigue siendo muy baja en comparación con otros sectores como el transporte y la energía.

Los déficits de inversión suelen cubrirse mediante el autoabastecimiento, cuando los usuarios, ya sean hogares o empresas, proporcionan y/o pagan su propio suministro de agua y saneamiento. Aunque esto cubre algunos déficits de inversión importantes, en muchos casos traslada la carga del pago de los servicios a los pobres.

Los riesgos de integridad ponen en peligro todos estos flujos financieros. WIGO analiza la integridad que afecta a la forma en que se calcula, recauda, asigna y gasta la financiación del agua y el saneamiento. Por lo general, las entidades gubernamentales desempeñan un papel protagónico en todos estos procesos -a través de la inversión pública y la gestión de las finanzas públicas-, aunque no sean los únicos actores. Por lo tanto, la evaluación de los riesgos de integridad es relevante para la mayoría de los actores privados, públicos y de otro tipo que participan en el ciclo presupuestario.

Desafiar los acuerdos institucionales

Los acuerdos institucionales en los sectores del agua y el saneamiento presentan importantes retos para garantizar la integridad financiera. Un aspecto clave es que estos sectores suelen funcionar como monopolios naturales, dados los elevados costes fijos asociados al abastecimiento y suministro de agua y a la eliminación del alcantarillado mediante infraestructuras construidas. Las condiciones monopolísticas crean oportunidades de captura, en las que las juntas y comisiones públicas pueden verse influidas por individuos con intereses creados.

La fragmentación del sector y la descentralización complican aún más el panorama institucional. A menudo hay un gran número de instituciones responsables del suministro de agua y saneamiento a nivel nacional y local, a veces con mandatos contradictorios o que se solapan. La falta de funciones y responsabilidades claras dificulta la rendición de cuentas.

La descentralización puede localizar la prestación de servicios, pero no aumenta intrínsecamente la rendición de cuentas y, en cambio, puede trasladar la corrupción o la escasa rendición de cuentas del ámbito nacional al local. También puede crear ineficiencias en la gestión de las finanzas públicas, aumentando la complejidad de los flujos financieros y la dificultad de rastrear los fondos. Estos complejos acuerdos institucionales requieren marcos reguladores sólidos para garantizar el uso eficiente de los fondos disponibles y tarifas justas para los usuarios.

Diversos modelos de prestación de servicios y regulación

Los distintos modelos de prestación de servicios, desde la provisión total por el sector privado hasta las asociaciones público-privadas, conllevan retos específicos en materia de integridad. Las directrices sobre licitaciones y conflictos de interés pretenden mejorar los procesos de contratación y limitar los riesgos de colusión o manipulación de licitaciones, pero su aplicación sigue siendo difícil, especialmente en contextos de corrupción sistémica. Los desequilibrios de poder e información entre los gobiernos y las grandes empresas privadas, la creciente financiarización, junto con los retos que plantean el cumplimiento de los contratos y la resolución de conflictos, complican aún más la regulación y la supervisión, y aumentan las posibilidades de que se produzcan fallas de integridad.

Si bien los gobiernos y los funcionarios electos suelen estar bajo el escrutinio público, también debe reconocerse y abordarse la magnitud de la corrupción en las empresas privadas, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Los pequeños actores del sector privado son importantes en el suministro de agua y saneamiento, y a

menudo llegan a los más marginados. Sin embargo, la falta de marcos reguladores claros deja margen para prácticas de explotación por parte de proveedores menos escrupulosos, incluidos los elevados costes del agua y la corrupción sexual. Es necesario mejorar la supervisión y la rendición de cuentas.

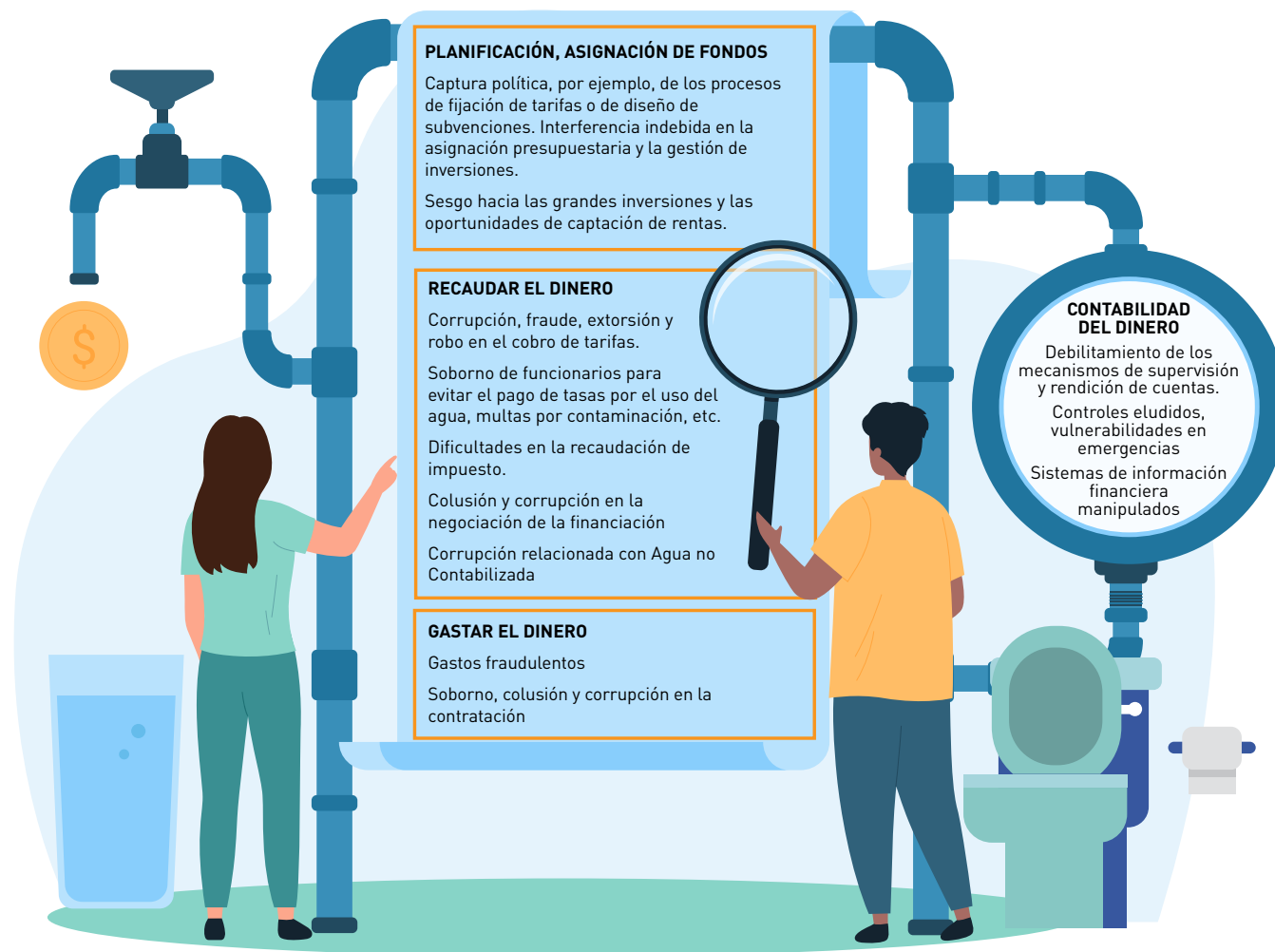
Amplia interacción con los clientes, con margen para la discreción

La interacción con los clientes en los sectores del agua y el saneamiento es amplia y se produce habitualmente en entornos informales -sobre el terreno, en los hogares, en las instalaciones de saneamiento, en quioscos lejanos- para actividades como la lectura de contadores, las solicitudes de conexión, la facturación y la concesión de licencias. Los sobornos no son infrecuentes. La corrupción sexual, o "sextorsión", puede darse en estas transacciones, con importantes repercusiones en el bienestar de las mujeres afectadas. Esta corrupción socava la sostenibilidad financiera general de la prestación de servicios, creando un círculo vicioso de financiación y rendimiento insuficientes. También puede marginar aún más a los pobres, que no pueden permitirse pagar sobornos.

Riesgos para la Integridad en el Ciclo Presupuestario

En cada fase del ciclo presupuestario se plantean problemas de integridad.

Figura 1: Ejemplos de riesgos para la integridad del agua y el saneamiento en el ciclo presupuestario



Planificación, estimación y asignación del dinero

La influencia de los políticos u otras partes interesadas puede conducir a la manipulación de normas y reglamentos, o a la captura de los procesos de fijación de subvenciones y tarifas. Esto tiene consecuencias a largo plazo: distorsiona cuánto dinero puede recaudarse, cómo se estiman las necesidades y se priorizan los proyectos, cuánto costarán los proyectos y requerirán financiación reembolsable, cuánto tienen que pagar los usuarios finales -especialmente los pobres- y cuánta capacidad hay en el sector para seguir y gestionar el gasto. Aunque la asequibilidad es difícil de establecer, sobre todo en contextos con un gran número de usuarios pobres, la integridad significa que las tarifas deben ser progresivas, con las subvenciones necesarias y adecuadas para los hogares pobres.

Los altos niveles de discrecionalidad en las decisiones sobre proyectos y en los procesos de asignación presupuestaria, combinados con la opacidad de los procesos presupuestarios y de preparación de proyectos, permiten la corrupción y la influencia indebida en la asignación presupuestaria y la planificación de proyectos. Los políticos y altos funcionarios responsables de las políticas del sector del agua pueden tratar de orientar las prioridades de inversión de forma que se creen oportunidades para la búsqueda de rentas u otras formas de corrupción, lo que afianza las desigualdades. Un intento de abordar el reto de la asignación sesgada de los recursos públicos es el Saneamiento Inclusivo en Toda la Ciudad, que exige a los proveedores de saneamiento que garanticen que la planificación del saneamiento y la asignación de fondos incluyan las zonas pobres con saneamiento sin alcantarillado.

Aportar dinero

Los ingresos de los servicios públicos se ven mermados cuando hay corrupción, fraude y robo en el cobro de las tarifas. Puede consistir en ignorar conexiones no autorizadas, manipular contadores o aceptar sobornos para no desconectar u ofrecer exenciones de tarifas.

El agua no facturada (ANR) supone un gran reto para la sostenibilidad financiera de los servicios de agua. Aunque están estrechamente relacionados con la corrupción y los problemas de integridad, estos aspectos no se abordan suficientemente en los programas

de reducción de ANR. Las pérdidas técnicas y las fugas pueden ser síntomas de problemas en la calidad de la infraestructura o de una planificación y presupuestación sesgadas e inadecuadas relacionadas con la corrupción. Las pérdidas comerciales pueden deberse a problemas de integridad relacionados con la facturación, la manipulación de contadores, la manipulación de los sistemas financieros o la mala conducta del personal, entre otros. El establecimiento de marcos reguladores eficaces y de medidas anticorrupción estrictas -como mecanismos de denuncia de irregularidades- puede ayudar a subsanar estas deficiencias.

El agua impaga suele achacarse a los malos usuarios y a las conexiones ilegales. Lo que suele ser menos visible es el número de grandes usuarios de agua que encuentran formas de evitar pagar por su consumo, incluidos los clientes industriales, las entidades gubernamentales y las personas bien relacionadas que pueden utilizar su influencia política o sus conexiones con la élite para apropiarse del agua sin recibir la correspondiente factura. Esto debería abrir debates sobre la asequibilidad de las tarifas y la idoneidad de las subvenciones y los programas de asequibilidad de los servicios públicos. Los enfoques basados en la integridad pueden hacer que la evaluación de riesgos sea más exhaustiva, reforzar los programas de agua no potable y ayudar a abordar las causas profundas.

A menudo se pasa por alto la colusión y la corrupción en la negociación de la financiación procedente de fuentes externas. La forma en que se estructuran las concesiones de agua y las asociaciones público-privadas desde el principio puede ofrecer oportunidades para el soborno, el fraude y la distorsión de precios durante décadas. La colusión en las negociaciones sobre la financiación de nuevas inversiones, especialmente cuando se trata de financiación de proyectos específicos fuera del presupuesto, afecta al coste del capital y repercute en la asequibilidad de las futuras tarifas y subvenciones.

Gasto y contabilidad del dinero

Los sistemas de gestión de las finanzas públicas (GFP) hacen operativa la gestión de los fondos, los pagos de salarios, el compromiso real de las liberaciones presupuestarias de los tesoros centrales con un conjunto de actividades o proyectos en lugar de con otros. También abarcan la contratación, la verificación de la entrega y el pago de insumos de terceros. La gestión de las finanzas públicas también abarca

la información financiera, la auditoría y la supervisión. A pesar de las elevadas inversiones de gobiernos y donantes en reformas y mejoras del sistema, los sistemas de gestión de las finanzas públicas suelen ser deficientes. En los países muy corruptos, la debilidad de los sistemas de gestión de las finanzas públicas puede ser el resultado deliberado de maquinaciones corruptas. Se necesitan mecanismos para abordar claramente los riesgos para la integridad que aparecen en todos los ámbitos de la GFP, desde datos y procesos inadecuados e instituciones débiles hasta una aplicación deficiente.

La contratación pública es el lugar de mayor corrupción en el gasto público. La corrupción y el fraude se producen tanto por parte de las autoridades contratantes como de los contratistas a través de sobornos, colusión y comisiones ilegales. Esto afecta a ministerios de agua, gobiernos locales, empresas de servicios públicos y la prestación comunitaria de infraestructuras y servicios de agua y saneamiento. La corrupción se manifiesta a menudo a través de estimaciones infladas para obras de capital y suministros, y la manipulación de los procesos de contratación para favorecer a determinados proveedores.

Instituciones de rendición de cuentas y supervisión, como reguladores del sector, organismos anticorrupción y auditores públicos, son cruciales para identificar y sancionar la corrupción en la financiación del agua y saneamiento, pero a menudo carecen de los recursos y la capacitación necesarios, y dependen de Sistemas Integrados de Gestión Financiera (SIGF) deficientes. Ha habido informes de manipulación deliberada de los SIGF para ocultar información a auditores, por ejemplo en Kenia. La aplicación de las normas es especialmente deficiente, sobre todo cuando las entidades fiscalizadoras superiores tienen mandatos limitados.

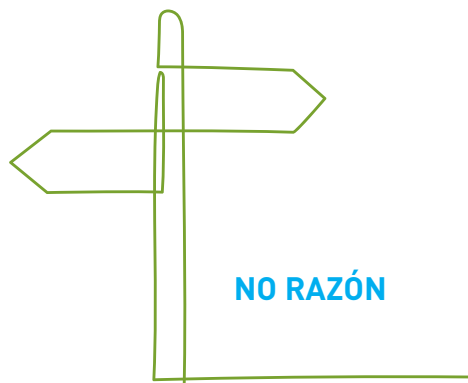
Merece la pena examinar, como caso especial, la afluencia de fondos sustanciales al sector del agua y el saneamiento para la ayuda en caso de catástrofe y la adaptación al cambio climático. Las excepciones de emergencia en las normativas de contratación, la intensa competencia entre organizaciones humanitarias y la falta de coordinación entre donantes, instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil (OSC) se suman a los riesgos generales de integridad a los que se enfrentan los sectores. En respuesta, deben explorarse más a fondo los mecanismos específicos de integridad, para el desembolso de fondos y para la auditoría de fondos en emergencias.

Desarrollo de Estrategias de Integridad Eficaces para la Financiación del Agua y el Saneamiento: No razón, No espacio, No indulgencia (No Reason, No Room, No Reprieve)

No abordar los numerosos riesgos de integridad en la financiación del agua y el saneamiento conlleva enormes costes económicos, humanos y medioambientales. Sin embargo, no existe una solución única. **El contexto es importante a la hora de desarrollar programas anticorrupción.** Por lo tanto, WIGO propone un enfoque de integridad que se puede utilizar para **desarrollar planes a diferentes niveles -en organizaciones, en programas, en políticas- para abordar riesgos específicos y las normas que los impulsan.**

El enfoque se basa en una combinación de tres grandes vías: No hay razón, No hay lugar y No hay indulto para la corrupción o las fallas de integridad. Este enfoque reconoce el valor de una evaluación de los riesgos para la integridad y de las normas sociales para orientar y priorizar la acción. Lo ideal es que esta evaluación sea participativa e integradora. **El objetivo final es una mejor gestión de las finanzas del sector, que conduzca a una mejor prestación de servicios, no para unos pocos, sino para todos.**

Las tres vías se derivan de las últimas investigaciones sobre la eficacia de las iniciativas de lucha contra la corrupción, integridad y gobierno abierto. La comprensión de las estrategias para combatir la corrupción ha evolucionado significativamente en las últimas décadas. Entre 1990 y 2010, el énfasis se puso en soluciones técnicas como nueva legislación, reglamentos o sistemas de supervisión. Se tendía a tratar la corrupción como una serie de incidentes aislados y a descuidar los fenómenos políticos y sociales subyacentes que la facilitaban. Con el tiempo, sin embargo, aumentaron las pruebas que sugerían que las intervenciones “tecnocráticas” limitadas, aunque necesarias, son insuficientes por sí solas, y requieren estrategias sistémicas y más específicas para cada contexto, como las destinadas a reforzar la rendición de cuentas y cambiar las normas sociales.



La vía “no razón” examina las expectativas y relaciones mutuas que sustentan la corrupción. Las normas sociales pueden servir para apoyar el funcionamiento de las redes corruptas. Pueden incluir expectativas culturales, religiosas o incluso de género sobre cómo se racionaliza la corrupción. Las prácticas de las organizaciones y los individuos se sitúan dentro de estas amplias normas sociales, lo que dificulta su identificación y cambio. La vía “no razón” pretende influir en las normas sociales e institucionales a todos los niveles,

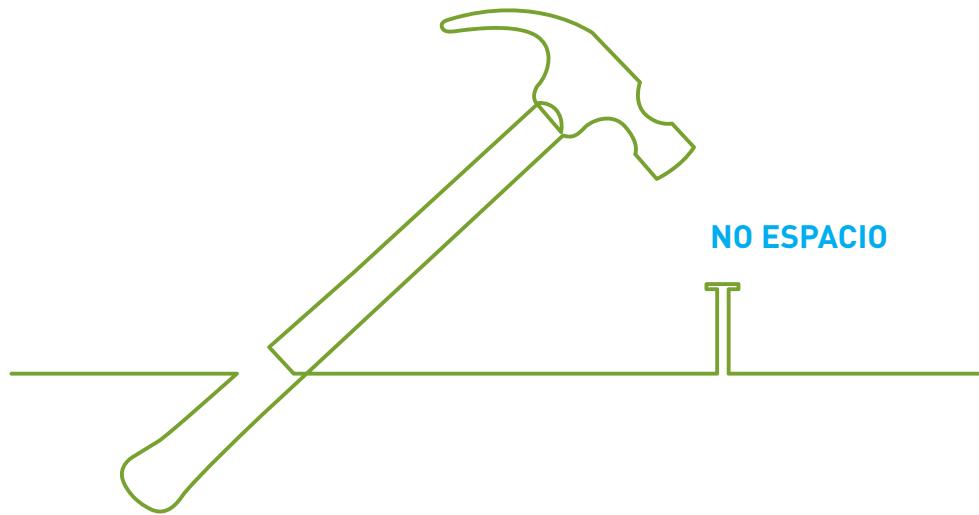
para debilitar la racionalización de las malas prácticas y reforzar el compromiso colectivo con la integridad.

Los cambios **dentro de las organizaciones o sectores específicos** ofrecen un punto de partida importante para revelar y cuestionar las normas que subyacen y moldean el comportamiento, y se espera que gradualmente tengan un impacto más amplio. El tratamiento de las normas puede impulsarse mediante el liderazgo ético y la recompensa de comportamientos que demuestren responsabilidad e integridad; campañas de sensibilización que hagan hincapié en el impacto negativo de la corrupción en las comunidades y los iguales; formación y desarrollo de capacidades para el personal y la dirección sobre las normas sociales e institucionales y cómo abordarlas; y asociaciones de múltiples partes interesadas que exijan un compromiso con la integridad.

Ejemplos:

Un ejemplo bien conocido de transformación a nivel organizativo que implicó el cambio de normas institucionales es el de la empresa de servicios públicos de Phnom Penh (PPWSA) en Camboya, a mediados de los años noventa. La transformación comenzó con un nuevo liderazgo que impulsó medidas anticorrupción y de transparencia, incluida la concienciación sobre el impacto de la corrupción. Se dio prioridad a la participación de los clientes y se promovió una sólida cultura ética, también directamente por parte de la dirección. Como resultado, PPWSA aumentó la recaudación de facturas, la disponibilidad de agua y la cobertura del servicio, y sigue siendo un ejemplo ampliamente citado de buenas prácticas.

Los pactos de integridad y las coaliciones de múltiples partes interesadas, como la Red Marítima Anticorrupción, son ejemplos de compromisos colectivos con la integridad que han influido en el comportamiento de los agentes del sector.



La vía “no espacio” se basa en intervenciones estructurales o de gestión **para reducir el espacio a actos de corrupción de los responsables del suministro de agua y saneamiento.**

Puede incluir la adopción de medidas para **limitar la discrecionalidad de los funcionarios**, el cierre de lagunas jurídicas y la adopción de herramientas digitales. La contratación electrónica o el pago de facturas por teléfono móvil, por ejemplo, han demostrado ser beneficiosos. **Funciones y responsabilidades claras son el punto**

de partida para reducir las oportunidades de influencia indebida en la toma de decisiones. Otros elementos de la vía de la “no espacio” son hacer públicos los criterios y supuestos en los que se basan las decisiones clave, como la fijación de tarifas y la asignación de subvenciones.

Los controles y los mecanismos de supervisión limitan el espacio para la mala conducta, reduciendo el alcance de la corrupción en general y aumentando al mismo tiempo la probabilidad de detectarla. Tanto las auditorías internas como las externas pueden desempeñar un papel fundamental a la hora de reforzar la vía de la “ausencia de espacio”, al igual que el fortalecimiento de las vías de **retroalimentación y los mecanismos de reparación.** Muchos proveedores de servicios de agua y saneamiento han tenido éxito mejorando las relaciones con los clientes y centrándose en la comunicación con los usuarios, introduciendo formas de recibir y hacer un seguimiento de las respuestas a las quejas y utilizando la tecnología para reducir el riesgo durante la lectura de contadores y el pago de facturas.

Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel clave en la vía “no espacio”, al exigir la rendición de cuentas del gobierno y de los proveedores de agua y saneamiento responsables. Pueden participar en -o crear- espacios de participación pública, por ejemplo mediante la elaboración participativa de presupuestos locales o el control presupuestario.

Ejemplos:

Los reguladores pueden desempeñar un papel importante a la hora de diseñar medidas reguladoras que “no dejen espacio” a la corrupción o a fallas de integridad. En Zambia, NWASCO aplica directrices para la fijación de tarifas que exigen la participación pública. También tiene acuerdos de nivel de servicio con las empresas de servicios públicos para supervisar el rendimiento, e informa sobre el rendimiento de las empresas de servicios públicos y la gobernanza corporativa.

El Auditor General de Sudáfrica utilizó auditorías en tiempo real de los fondos de ayuda en caso de catástrofe desembolsados en las provincias de KwaZulu-Natal y Cabo Oriental para informar sobre la ayuda tras las desastrosas inundaciones relacionadas con el clima. Descubrió controles inadecuados de los procesos de pago, así como la ausencia de protecciones contra los sobrepagos, las pérdidas financieras y el fraude.



NO INDULGENCIA

La vía del “no indulgencia” reconoce la importancia de ser eficaz tanto en la detección como en el castigo. Se centra **en la disuasión y envía un mensaje claro de que las acciones poco éticas no pasarán desapercibidas ni quedarán impunes, que la impunidad no es una opción.**

La era de **los macrodatos ofrece oportunidades** para analizar datos relacionados, por ejemplo, con decisiones de inversión, contratación pública, facturación y nóminas, para detectar señales de alarma que puedan indicar corrupción u otras fallas de integridad. El seguimiento del gasto y el refuerzo de la colaboración con las Entidades Fiscalizadoras Superiores son elementos importantes de esta vía.

La denuncia de irregularidades es una importante fuente de información sobre corrupción y violaciones de la integridad, y es fundamental para la vía de no indulgencia, por lo que **los mecanismos de protección de los denunciantes** son fundamentales para todas las organizaciones de agua y saneamiento.

Ejemplos:

La Unidad de Evaluación Independiente del Fondo Verde para el Clima, el mayor fondo mundial dedicado al clima que gestiona 45 millones de dólares de activos totales, ha aprovechado las innovaciones en el espacio digital desarrollando módulos de aprendizaje automático para ayudar a identificar los riesgos para la integridad. Ha desarrollado una plataforma de debida diligencia en materia de integridad (IDDP, por sus siglas en inglés; Integrity Due Diligence Platform) que emplea el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural (PLN) para identificar “señales de alarma” a partir de textos extraídos de documentos de proyectos.

Pasar a la Acción

Todos los actores tienen un papel importante en la adopción de medidas que combinen las vías - “no razón”, “no espacio” y “no indulgencia”- y en el trabajo conjunto para mejorar la integridad. Esto puede significar trabajar con nuevos socios: cooperar y establecer vínculos con los organismos y mecanismos anticorrupción y las Entidades Fiscalizadoras Superiores, trabajar con aliados de distintos sectores y establecer relaciones con otros tipos de partes interesadas.

WIGO considera que hay tres grandes áreas de acción que son las más relevantes para mejorar la integridad financiera en los sectores del agua y el saneamiento y crear una cultura de integridad:

- reforzar la gestión de las finanzas públicas,
- promover la participación de las partes interesadas, la aportación y supervisión de la sociedad civil y la responsabilidad social, e
- influir en las normas sociales.

A través de estos puntos de entrada, los defensores de la integridad de todo el mundo pueden avanzar en sus propios viajes, adaptándolos a los diversos contextos y retos a los que se enfrentan, y encontrar motivos fructíferos para el debate y, sobre todo, para la acción. WIGO comparte recomendaciones clave ([aquí](#) y en [más detalle con acciones por grupo de interés en la Parte 5](#)) sin ser un manual exhaustivo.

Refuerzo de la gestión de las finanzas públicas en el sector del agua y el saneamiento

Una gestión eficaz de las finanzas públicas es esencial para el buen funcionamiento de la administración, la gestión sostenible de los recursos y la prestación de servicios, también en situaciones de emergencia. Por encima de todo, una gestión eficaz de las finanzas públicas requiere más transparencia (especialmente en procesos complejos como la contratación pública), herramientas de datos y procesos sólidos para detectar rápidamente las prácticas corruptas, así como una sólida supervisión multilateral.

- **Garantizar la equidad en las tarifas y subvenciones**, con aportaciones de las partes afectadas y salvaguardias contra la captura.
- **Introducir la contratación abierta y la contratación electrónica**, asegurándose de formar a las partes interesadas y de hacer que los datos sean utilizables.
- **Poner en una lista negra pública a los contratistas corruptos** y dejar de trabajar con ellos.
- **Fomentar y proteger a los denunciantes**
- **Garantizar la transparencia financiera**, incluida la financiación de infraestructuras mediante préstamos privados y otros préstamos externos.
- **Utilizar análisis de macrodatos** y crear capacidad de recopilación y análisis de datos.
- **Reforzar la colaboración con las Entidades Fiscalizadoras Superiores.**
- **Instituir salvaguardias de integridad para la gestión de catástrofes**, con normas claras y múltiples mecanismos de supervisión, como auditorías en tiempo real o seguimiento ciudadano.

Facilitar la participación de las partes interesadas en agua y saneamiento

La participación de las partes interesadas en la toma de decisiones financieras en el sector del agua y saneamiento es crucial para reducir la corrupción y mejorar la integridad. Este es especialmente el caso de las decisiones de alto riesgo, relacionadas con la fijación de tarifas, las políticas de subvenciones y las repercusiones financieras a largo plazo de los préstamos. Este compromiso requiere vías específicas e inclusivas para la participación y la responsabilidad social, junto con el desarrollo de capacidades para que sean eficaces.

- **Implicar al público en las decisiones financieras**, prestando atención a los más marginados, y en particular en las decisiones relativas a la asignación presupuestaria, la financiación reembolsable, la fijación de tarifas y las subvenciones.
- **Promover la integridad en el sector privado**, evaluando los riesgos y exigiendo y supervisando el cumplimiento y las prácticas de gestión.
- **Capacitar a la sociedad civil y a los medios de comunicación, reforzar la responsabilidad social** desde el nivel local al nacional, permitiendo el análisis presupuestario, el gasto, la gestión financiera y la auditoría, así como la comunicación de resultados.

Promover una cultura de integridad para el agua y saneamiento

Las reformas sectoriales pueden verse socavadas por normas sociales que privilegian la corrupción. Una cultura de la integridad puede marcar la diferencia y puede construirse eficazmente dentro de las instituciones, organizaciones y proyectos. Esto se consigue promoviendo y recompensando la integridad, y estableciendo expectativas de integridad y colaboración por parte de todos los interesados, incluidos los agentes del sector privado y los participantes en iniciativas de múltiples partes interesadas. Un primer paso importante puede ser la evaluación cuidadosa de los riesgos que ponen de manifiesto las normas subyacentes.

- **Crear plataformas con las partes interesadas** para mejorar la toma de decisiones, impulsar la acción colectiva y reforzar la supervisión.
- **Influir en las normas sociales relacionadas con la integridad**, analizando las normas y destacando su impacto en los compañeros, formando y recompensando la integridad de todos los actores, tanto formales como informales.

Conclusión

Subsanar las fallas de integridad en la financiación de los sectores del agua y el saneamiento no es sólo una necesidad financiera, sino también un imperativo social. Los costes de la inacción -que se manifiestan en prestación deficiente de los servicios, costes de infraestructura inflados y una calidad del agua comprometida- afectan de manera desproporcionada a las comunidades marginadas y socavan objetivos de desarrollo más amplios.

Al fomentar una cultura de integridad, podemos garantizar que los fondos disponibles se utilicen de forma eficaz, que los proyectos se prioricen correctamente y que los servicios se presten de forma equitativa y sostenible. Este enfoque requiere el compromiso y la cooperación de todas las partes interesadas, desde los organismos gubernamentales hasta las organizaciones de la sociedad civil y los socios del sector privado, cada uno de los cuales desempeña un papel fundamental en el fomento de la transparencia, la rendición de cuentas y las prácticas éticas.

El Panorama Mundial de la Integridad en el Sector del Agua (WIGO) proporciona un marco integral para abordar los retos de integridad en la financiación del agua y el saneamiento. A través de las vías “no razón”, “no espacio” y “no indulgencia”, las partes interesadas pueden desarrollar estrategias a medida que aborden las causas profundas de la corrupción y las fallas de integridad. Reforzando la gestión de las finanzas públicas, fomentando la supervisión por parte de la sociedad civil y cambiando las normas sociales, podemos crear sistemas de agua y saneamiento resistentes que sirvan a todos, especialmente a los más necesitados.

Ha llegado el momento de actuar con decisión y colaboración para garantizar que el derecho al agua, al saneamiento y a un medio ambiente limpio se haga realidad para todos.



WIN Water
Integrity
Network